

En la antesala de las elecciones del 28 de octubre:

Cuatro puntos sobre la situación nacional.

1. Persisten las principales dificultades de Uribe.

El rasgo principal de la situación nacional sigue siendo la crisis política originada en las relaciones del Ejecutivo y un amplio sector de las fuerzas y dirigentes uribistas con el *paramilitarismo*. Lejos de atenuarse, la crisis política periódicamente recibe el combustible de las declaraciones de los acogidos a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y las pruebas recolectadas por los organismos de investigación, que van destapando nuevos hechos, nuevas componendas electorales y nuevos implicados. Los parlamentarios investigados por la Corte Suprema de Justicia ya suman 42, 41 de ellos beligerantemente uribistas. El llamado a indagatoria al ex presidente del Congreso Mario Uribe, primo del Presidente de la República, tendrá duras repercusiones en la arena internacional.

Lo que en estas páginas hemos escrito sobre el tema ha sido ratificado, con creces, por los hechos; en especial, que si bien la opinión pública precisa dónde y cuándo comenzó la crisis, nadie puede hoy prever dónde pueda terminar, ni la gravedad de las nuevas dificultades que pueda causar al Gobierno. Ejemplo de ello son las recientes declaraciones del ex presidente Pastrana a la Revista Semana donde afirma que el presidente Uribe está legalizando narcotraficantes y que existe un pacto secreto con los *paramilitares*.

Hay varios hechos novedosos en la crisis: uno, la defensa intransigente del status político de los “paras” desmovilizados que ha asumido el Presidente en choque público con la Corte Suprema de Justicia, que en un fallo emitido por su Sala Penal precisó que a ellos no se les puede juzgar por “sedición”, que es un delito político, sino por “concierto para delinquir agravado”, que es un delito común, y que implica de ser condenados, la pérdida de los derechos políticos. Detrás de la polémica está la clara intención gubernamental de impedir que dos decenas de miles de desmovilizados pierdan esos derechos y por tanto, no puedan participar en los comicios electorales, especialmente en los del 2010 para los cuales ya se anunció, en el Congreso Ideológico del Partido de la U, un plan que conduciría a la segunda reelección de Álvaro Uribe. Dos, aceptar, en un desayuno con la bancada uribista en la Casa de Nariño, que “se estudiarán” fórmulas que permitan reducir las penas máximas a que pueden ser condenados los dirigentes políticos presos por la *parapolítica*. Y tres, la enconada polémica pública con la Corte Suprema de Justicia que reaccionó frente a las infundadas acusaciones del Presidente contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez, magistrado estrella de las investigaciones sobre el *paramilitarismo* y sus relaciones con los políticos uribistas.

Para minimizar la gravedad de la crisis y sus implicaciones sobre la vida nacional el presidente Uribe ha recurrido a múltiples maniobras de distracción. Una de ellas es referirse reiteradamente a los “éxitos” de su política económica y, en especial, al

crecimiento el año anterior del PIB en 6,8%. Como si la opinión entendida en temas económicos no supiera que ese crecimiento fue inferior al promedio de crecimiento de América Latina y de los países del Tercer Mundo o “en desarrollo” como prefieren llamar algunos a los países pobres. O que la inmensa mayoría de la población no padeciera en carne propia la tragedia que significa el incremento de la inflación, que roba buena parte de sus ingresos; el aumento del desempleo, de la pobreza, y de la informalidad; y el deterioro acelerado del nivel de vida de la población. O que los empresarios nacionales no comprendan los inmensos perjuicios de una revaluación especulativa del peso que ha disparado las importaciones, el déficit comercial y el déficit de cuenta corriente.

La situación internacional para el presidente Uribe se ha complicado sustancialmente en la medida que la aplicación de la política imperial norteamericana enfrenta obstáculos de magnitud no imaginada hace pocos años: la derrota electoral de Bush propinada por el Partido Demócrata –que ha implicado el aplazamiento de la aprobación del TLC y la reducción de la ayuda militar-, las dificultades de la ocupación de Irak, la consolidación de gobiernos en América Latina por fuera de la órbita gringa, la divergencia creciente con Rusia y las graves condiciones de la economía que amenazan con una nueva y más intensa recesión, como advierten la mayoría de los centros de pensamiento económico norteamericanos.

2. El Polo y sus definiciones políticas sustanciales.

La reunión del Comité Ejecutivo del Polo Democrático Alternativo celebrada el miércoles 20 de septiembre en el Hotel Bacatá de Bogotá es el remate del debate público iniciado con la declaración del PDA sobre el asesinato de los once diputados del Valle del Cauca. Debate público que incluyó ataques de reconocidos voceros de las Farc a dirigentes del Polo y opiniones de funcionarios gubernamentales anunciando alborozados la división del principal bastión de la oposición al uribismo.

Las conclusiones finales están plasmadas en la declaración, aprobada por unanimidad, que surgió como resultado de la reunión. Allí, sin ambigüedades, como reclama Carlos Gaviria de las posiciones oficiales del Polo, se condena “el homicidio de los once diputados del departamento del Valle” y se señala “la responsabilidad de sus captores, las Farc, en su trágico final”. Se “rechaza la práctica del secuestro y se condena, una vez más, la violencia, el terrorismo y la guerra”. Se respalda plenamente la solución política del conflicto armado y las diferentes iniciativas por el acuerdo humanitario. Asimismo, se condenan las declaraciones hechas por miembros de las Farc contra Gustavo Petro, María Emma Mejía, Luis Eduardo Garzón y Antonio Navarro, y las de Álvaro Uribe contra Carlos Gaviria y otros dirigentes del Polo.

Una de las definiciones clave del PDA, la del deslinde tajante con la “combinación de todas las formas de lucha”, la violencia, el terrorismo y el secuestro, fue reafirmada en esa histórica sesión del Comité Ejecutivo y, la opinión pública, pese a las recurrentes calumnias oficiales, sabe que en Colombia el pueblo cuenta con una alternativa política democrática, que es consecuente con la defensa de sus más caros intereses y

derechos, y clara opción de gobierno y transformación social tanto en las elecciones territoriales del 28 de octubre como en las parlamentarias y presidenciales del 2010.

La otra definición que debe tomar la dirección del PDA es la formulación precisa de una política de alianzas amplia, que permita que el Polo, que ganó con su votación de 2006 el derecho a ser la principal fuerza de oposición, ejerza ese liderazgo y convoque a todos los sectores políticos que no comulgan con las medidas oficiales a realizar en las regiones acuerdos programáticos electorales que centralicen las fuerzas, unifiquen candidaturas y propinen derrotas de consideración al proyecto político uribista. El acuerdo logrado en Santander, entre el PDA y el Partido Liberal, para respaldar la candidatura a la Gobernación de Horacio Serpa es un buen ejemplo de unidad contra el blanco principal.

No tiene sentido alguno, desde el punto de vista de los más altos intereses de la nación, ni de los particulares de una fuerza en ascenso como el Polo, que se margine, en la práctica, de la definición de contiendas electorales por gobernaciones o alcaldías muy importantes a cambio de “contar los votos del Polo” con unas candidaturas propias, de partido, que encarnan compañeros con excelsas virtudes pero sin mayor arraigo en la voluntad popular.

3. ¡Samuel Moreno, Alcalde de Bogotá!

En Colombia, hemos insistido en ello de manera reiterada, está planteado un pulso entre el proyecto político uribista, neoliberal y fascistoide, y las corrientes políticas democráticas y de oposición, con el Polo a la cabeza. El resultado final de esa confrontación es definitivo para el futuro de Colombia y la expresión más concentrada hoy es la disputa por la Alcaldía de Bogotá entre el candidato del presidente Uribe, Enrique Peñalosa, y el candidato del Polo, del pueblo, de los demócratas, Samuel Moreno.

Ante esta perspectiva, dados los asuntos trascendentales en juego, la labor del Polo debe intensificarse de aquí al 28 de octubre. Todos los recursos humanos, políticos y económicos deben ser colocados al servicio de la campaña electoral para la Alcaldía de la Capital. No solo debemos movilizar a las urnas hasta el último de nuestros simpatizantes y amigos sino propiciar el respaldo a Samuel Moreno de centenares de dirigentes populares de Bogotá, que no militan con el Polo sino con otras banderías políticas, pero que comprenden con su experiencia diaria que de ganar el candidato de las losas quebradas en las troncales de transmilenio, de los bolardos y los grandes negociados, la ciudad y el nivel de vida de la mayoría de sus habitantes retrocederán decenas de años.

Todo parece indicar, que de no mediar fenómenos extraelectorales o la manipulación oficial de las debilidades denunciadas y reconocidas del sistema electoral, Samuel Moreno será el próximo Alcalde Mayor de Bogotá. De ser ello así, el pueblo bogotano y la ciudad toda ganaría la continuidad y la profundización de los exitosos programas sociales de la Administración de Luis Eduardo Garzón. Y el Polo, si resuelve

correctamente sus definiciones políticas sustanciales, con el triunfo en la Capital establecería una base material inconmensurable que lo presentaría como alternativa de gobierno en el 2010.

4. Exigimos del Gobierno protección a la vida de Marcelo Torres, candidato a la Alcaldía de Magangué.

Cuando el PDA de Magangué, dirigentes políticos de la región y decenas de ciudadanos representantes de todos los sectores sociales y económicos del municipio propusieron la candidatura de Marcelo Torres a la Alcaldía, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Polo y Secretario General del PTC (moirista), como la fórmula más idónea para superar la actual situación de pobreza y corrupción administrativa, consideramos nuestro deber facilitar el desplazamiento del más destacado de nuestros dirigentes a que asumiera, a nombre del PDA, ese desafío con pleno conocimiento de sus responsabilidades y riesgos.

En esa heroica campaña, llena de limitaciones y constreñida por un ambiente intimidatorio, la figura y la capacidad de Marcelo Torres, aunadas al entusiasmo y la amplitud del equipo de trabajo que allí se ha conformado, lo han posicionado como la única opción de lograr las transformaciones sociales y administrativas indispensables para superar el atraso y la pobreza en esa comarca. Así lo señalan las pocas encuestas de opinión, que pese a la maquinaria oficial, se han filtrado.

Como lo afirma Marcelo Torres en reciente carta enviada al Ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, “la primera condición para que las elecciones en Magangué sean genuinamente democráticas es que sea satisfecha en los hechos la fundamental garantía de la debida protección a la vida y la integridad de los ciudadanos y particularmente la de aquellos que, con el definido propósito de cambiar tan deplorable estado de cosas allí reinantes, aspiran a ser elegidos para los cargos de elección popular y, particularmente, para el de Alcalde”. Sin embargo, las reiteradas peticiones al Gobierno Nacional de incremento sustancial del esquema de seguridad asignado al candidato y de alerta por los graves indicios sobre la preparación de un fraude electoral el 28 de octubre, no han sido ni contestadas ni mucho menos satisfechas.

Exigimos del presidente Uribe y, en general, del Gobierno Nacional, pronta y eficaz respuesta a las demandas de seguridad para el candidato del PDA a la Alcaldía de Magangué y garantías para el democrático y limpio desarrollo de las elecciones en ese municipio.